

La política, idiotas, la política

Fernando Moraleda ▶
Diputado socialista por
Ciudad Real. Portavoz
en la Comisión Mixta de
Cambio Climático

Con 50 años de historia y la etiqueta justificada de ser la más común de las políticas comunes, la PAC se enfrenta ahora a un enésimo debate sobre su futuro, que ya ni siquiera se denomina “reforma” (porque el término está muy devaluado de tanto usarlo) sino “horizonte” o “estrategia”, con un límite temporal que llega a 2014 y que produce algo de vértigo, dada la velocidad de los cambios actuales.

Como buena política común, la PAC se ve for-

zada a este debate porque se autoobliga con su propio calendario, derivado de las perspectivas financieras para el periodo 2014-2020. Que se hable primero del presupuesto es una garantía, pero la discusión a 27 será sustancialmente distinta a la discusión de las perspectivas financieras anteriores, sobre todo el análisis de fondo seguirá siendo qué PAC necesitamos y para quién.

Hablamos de un debate político de máximo nivel, que frente a reformas anteriores también incorpora otra novedad: la capacidad de codecisión del Parlamento Europeo. El poder real de la máxima representación democrática en Europa nos garantiza un escenario más complejo y con seguridad más enriquecedor que el habitual reparto de intereses nacionales que aflora en los Consejos de Ministros. La transversalidad política producirá, sin duda, cambios desconocidos para la lógica de decisión anterior.

Aunque estamos todavía, en todo caso, en una fase muy incipiente de reflexiones y posicionamientos previos, sin propuestas concretas de la Comisión Europea, el protagonismo real del Parlamento Europeo y la complejidad general del momento, en el que la crisis lo condiciona y contamina todo, marcarán un nuevo modo de actuar en el acquis comunitario.

No hay más que observar el empeño reciente de la Presidencia española de la UE, que ha conseguido que la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas en junio, como cierre del semestre, aprobase la “Estrategia Europea 2020”; y que en su componente agraria tuvo ya un precedente con el documento presentado en la reunión informal de ministros de Agricultura celebrada en Mérida a finales de mayo.

La influencia española en la definición de la “Estrategia Europea 2020” se ha convertido así en el hecho más relevante del semestre de presidencia europea. Y también se ha dejado notar la mano de España en el documento finalmente aprobado en junio respecto a propuestas iniciales, porque la agricultura ha pasado de tener una mínima presencia en las estrategias europeas a formar parte del entronque decisorio del futuro.

Es verdad que normalmente no es fácil trasladar al conjunto de la sociedad la trascenden-



▼
La “Estrategia Europea 2020” habla de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y los mismos términos aparecen en el documento presentado en el Consejo agrícola informal de Mérida. Son valores o direcciones estratégicas no sólo para el futuro agroalimentario europeo sino, ante todo, del modelo de sociedad futura europea

cia de este tipo de “papeles”, que manejan los términos con mucha habilidad, concretan poco o nada, y se explican y entienden mal en una breve noticia de prensa o televisión.

Sin embargo, los grandes cambios en la integración europea han arrancado siempre con documentos “estratégicos”, que a medio plazo se convierten en norma y en políticas reales, y nos condicionan –¡de qué manera!– nuestra vida y nuestro futuro.

Por ello debemos valorar la trascendencia de la “Estrategia Europea 2020”. Intenta, en primer lugar, marcar un nuevo modo de actuar como respuesta a la crisis global provocada por los desmanes especulativos del sistema financiero. Y marcar una respuesta desde la política, desde la representación democrática supraestatal que tenemos en la Unión Europea. Sin olvidar nunca que este modelo europeo es único en la historia política que compartimos, además de ser la región del mundo donde nace y se desarrolla el Estado del bienestar.

Y la misma trascendencia tiene en el ámbito concreto de la política agraria y de desarrollo rural, donde las orientaciones estratégicas convertidas en concreciones presupuestarias y reglamentarias serán muy superiores a la historia de medio siglo de la PAC.

Una vuelta inteligente a los orígenes

La “Estrategia Europea 2020” habla de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y los mismos términos aparecen en el documento presentado en el Consejo agrícola informal de Mérida. Son valores o direcciones estratégicas no sólo para el futuro agroalimentario europeo sino, ante todo, del modelo de sociedad futura europea.

Se trata, pues, de poner en valor la función social, territorial y económica que ejercen los hombres y mujeres que viven y trabajan en el campo, cerca de 14 millones de personas en toda la UE dedicados directamente a la agricultura y la ganadería, y otros 5 millones en las industrias de primera transformación. Esta es la mejor razón para defender, como en el origen de la PAC, una nueva PAC para una nueva sociedad europea.

Un objetivo que no hace sino retomar la filosofía fundacional de la Política Agraria Común, muy matizada en los últimos 20 años por las reformas destinadas a “desmantelar” mecanismos reguladores del mercado y abandonar la obligación de políticas comunes por la comodidad egoísta de dar protagonismo a las demandas nacionales. En

este sentido, la Comisión y sus últimos comisarios de Agricultura no serán recordados por hacer más Europa.

La crisis global ha ayudado a destapar todas las vergüenzas de este modelo fracasado y por ello ahora hay que volver a “reinventar” la PAC, utilizando nuevas palabras para explicar viejas ideas y repetir antiguos objetivos como los de cohesión y modulación, entendida ésta como reparto justo de recursos públicos entre aquellos que realmente los necesitan y merecen.

Y en este juego de palabras nuevas hay un término que me resulta especialmente destacable, cuando se habla de “Gobernanza reforzada” y no sólo aplicada al sector agrario; porque no deja de ser paradójico que la mayor concentración mundial de poder institucional y gestión democrática se vea obligada a comprometerse a sí misma a reforzar la gobernanza, se entiende que para poner “orden” en los “mercados”.

Es momento de retomar la iniciativa

En las tomas de posición de partida que se están realizando en la actualidad se incluye también un documento muy relevante del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, con el que han fijado su posición de partida ante el debate sobre el futuro de la PAC.

Los socialistas europeos afirman con buen criterio que “entre las numerosas líneas divisorias políticas que siempre han caracterizado las diferencias entre progresistas y conservadores hay una que persiste. Los primeros son, por lo general, quienes anticipan y guían los procesos de reforma ambiciosos, mientras que los segundos sólo se ponen a ello cuando se ven obligados por la emergencia de crisis o por exigencias externas. La reforma de la PAC de los quince últimos años ha seguido más bien el segundo camino. Creemos que ha llegado el momento de retomar la iniciativa y desempeñar el papel de vanguardia que nos corresponde, proponiendo una agenda agrícola ambiciosa para los próximos decenios”.

Nadie duda que la PAC se encuentra en una encrucijada. Pero no todos nos enfrentamos a ella desde premisas iguales. Los colectivos progresistas (políticos, parlamentarios, sindicales, sectoriales...) siempre hemos liderado el empuje hacia una Europa mejor y ahora volvemos a tener esta responsabilidad. Por ello, los socialistas europeos reafirman la importancia de la fun-

▼
Nadie duda que la PAC se encuentra en una encrucijada. Pero no todos nos enfrentamos a ella desde premisas iguales. Los colectivos progresistas (políticos, parlamentarios, sindicales, sectoriales...) siempre hemos liderado el empuje hacia una Europa mejor y ahora volvemos a tener esta responsabilidad



ción desempeñada por los agricultores europeos y la necesidad de una Política Agraria Común fuerte, capaz de superar los nuevos retos y proponer un nuevo proyecto, ambicioso y transparente. Un “nuevo pacto” entre el mundo agrícola, la industria en las fases anteriores y posteriores al sector, la investigación y el desarrollo, y, especialmente, los ciudadanos que son al mismo tiempo contribuyentes y consumidores, sobre una elección de sociedad compartida.

La agricultura sigue siendo un sector estratégico y no puede contemplarse como un sector económico más. La función primordial de la agricultura es alimentar a los hombres y las mujeres. Y la UE debe seguir gestionando esta responsabilidad común, lejos de cualquier forma de renacionalización y/o cofinanciación.

La nueva política agraria común deberá basarse en el tríptico legitimidad / equidad / eficacia. Legitimidad de los recursos públicos comprometidos y aceptados por el contribuyente, equidad en la asignación de los fondos europeos entre los 27 Estados miembros, dentro de cada país y entre los agricultores y regiones, y eficacia en el buen uso de los fondos públicos, teniendo en cuenta que la solidaridad es para nosotros uno de los valores que están en la base de la UE.

Una PAC reorientada para servir a los 500 millones de ciudadanos europeos y valorizar la agricultura de cada país, defendiendo nuevos modelos de producción agrícola sostenible en todo el territorio de la Unión Europea y capaz de

responder a los grandes retos medioambientales (cambio climático, escasez de recursos, contaminación de las aguas, degradación de los suelos, etc.). Sin olvidar que la PAC no puede dejar de participar en el desarrollo de los territorios para crear empleo en las zonas rurales.

El debate se terminará centrandose, además de la ficha financiera global de la PAC, en cuál debe ser el modelo del futuro para las ayudas directas, qué instrumentos de gestión de mercados hay que utilizar y qué peso real tendrá la política de desarrollo rural. En tal sentido, es preciso reflexionar y concretar un nuevo modelo de relación profesional entre productores e industrias. Mi opinión es que la industria española no encontrará la rentabilidad en los bajos precios pagados a los agricultores y ganaderos, sino en su propio esfuerzo en I+D+i, que nos permita dar el salto de nuestra actual dimensión cuantitativa a una industria moderna de nuevos productos de calidad y con mayor presencia en el mercado exterior. Estoy también convencido de que un marco contractual estable entre productores e industrias es el complemento adecuado a la política de investigación y desarrollo que estas últimas deben hacer. La distribución agroalimentaria tendría así un marco estable de precios con sus proveedores sin recurrir a métodos que distorsionan la competencia.

Lo que se plantea es la necesidad de cambiar el modelo actual re-reformado, que ha ido perdiendo el sentido y desdibujando la foto fija sobre la que se han hecho las reformas. A cam-

▼
La industria española no encontrará la rentabilidad en los bajos precios pagados a los agricultores y ganaderos, sino en su propio esfuerzo en I+D+i, que nos permita dar el salto a una industria moderna de nuevos productos de calidad y con mayor presencia en el mercado exterior



bio se trata de pasar a un nuevo sistema que debería marcar el “contrato agroalimentario” con la sociedad; en definitiva, reconociendo su papel como creadores de empleo y conservadores de los recursos naturales.

En el fondo, con la jerga y las nuevas inquietudes del siglo XXI, no dejar de ser un volver a los orígenes, tras comprobar amargamente que el modelo de economía social de mercado que disfrutamos en Europa no es sinónimo de la “economía de los mercados”, entendidos como un gran espacio global en el que el ordenamiento de la actividad económica parecía haberse convertido en un estorbo a eliminar.

Ha sido necesario explotar para enfrentarnos a recomponer las piezas y constatar la enorme fragilidad de un sistema que no sólo no está siendo capaz de corregir los desequilibrios mundia-

les entre países y grupos sociales, sino que además ha puesto en serio riesgo de supervivencia a lo que suponemos como conquistas irrenunciables del “primer” mundo, incluida la seguridad alimentaria, entendida como disposición de alimentos para todos, con precios justos para todos, los que los producen y los consumidores.

Creo que es obligado plantear algunas ideas sobre el cambio climático y su relación con la agricultura, en coherencia con mi dedicación actual a estos temas como diputado socialista en el Parlamento español.

Es obvio que el cambio climático, y en general las políticas ambientales de conservación y uso racional de la biodiversidad y los recursos naturales, están cada vez más presentes como elemento de referencia dentro del objetivo de economía sostenible y, por supuesto, de una agricultura también sostenible. Desde luego, lo son en todas las conclusiones recientes del Consejo Europeo, del G-8 y del G-20.

También es evidente, aunque hay quien se resiste a verlo, que la agricultura debe adaptarse a los efectos del cambio climático, aun no conociendo en su totalidad el alcance y profundidad de los mismos. El panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas nos alerta del avance de las zonas áridas, la mayor variabilidad de las rutinas climatológicas y la mayor difusión de elementos patógenos fito y zoonosarios. La agricultura debe adaptarse a estos cambios y la PAC debe dar respuestas concretas ante los efectos del cambio climático.

Porque la excusa de la crisis y la necesidad permanente de mejora de la productividad no son razones para evitar una actitud positiva y comprometida de la actividad agraria en la lucha contra el cambio climático, en la que de entrada aporta beneficios ambientales por su papel en la fijación de CO₂ y el secuestro de carbono.

En fin, es el momento de la política y de poner nuevos sillares para un edificio que necesita rehabilitarse por antiguo, pero no modificar su naturaleza ni sus aspiraciones originarias de preservar un modelo europeo más lleno de éxitos que de fracasos. El riesgo es que quienes han provocado los problemas, denunciando la ingerencia de la política en los mercados, tengan ahora más capacidad de decisión en las “soluciones” porque no sepamos o no podamos dotarnos de la iniciativa política necesaria para volver a hacer avanzar el progreso social en el mundo rural europeo. ■